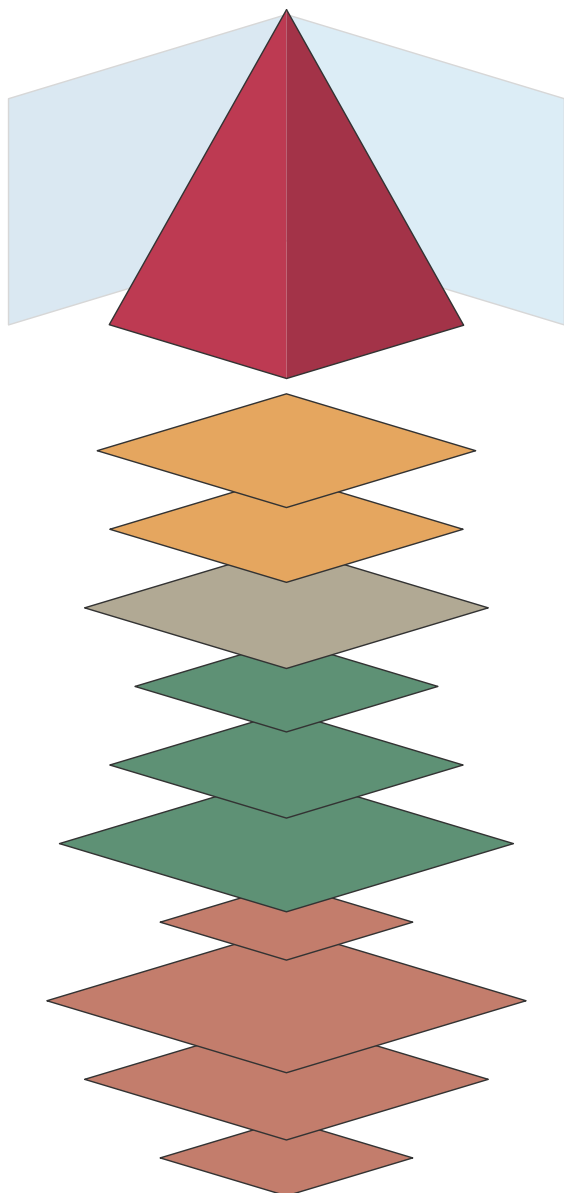




COLOMBIA



7,66

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

2° de 193 países

1° de 35 países americanos

1° de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 7,20

TRATA DE PERSONAS 7,50

TRÁFICO DE PERSONAS 7,00

TRÁFICO DE ARMAS 8,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 6,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 7,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 9,00

COMERCIO DE HEROÍNA 5,00

COMERCIO DE COCAÍNA 9,50

COMERCIO DE CANNABIS 8,00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 5,00



ACTORES CRIMINALES 8,13

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 9,50

REDES CRIMINALES 9,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 7,00

ACTORES EXTRANJEROS 7,00



5,83

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

40° de 193 países

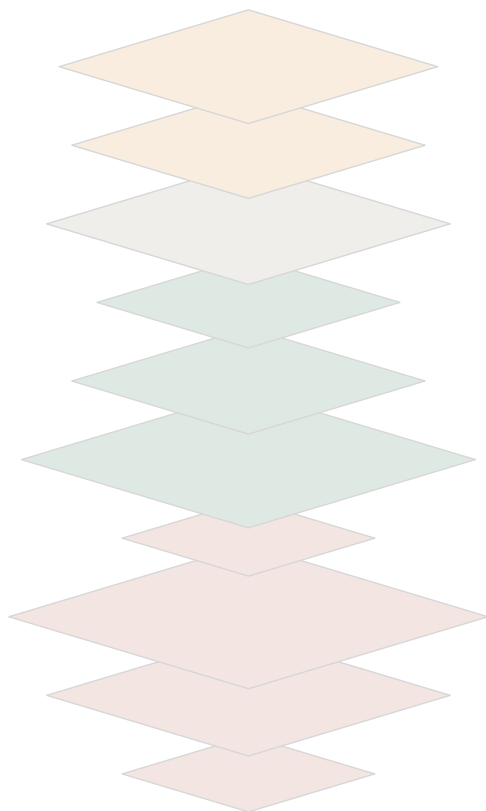
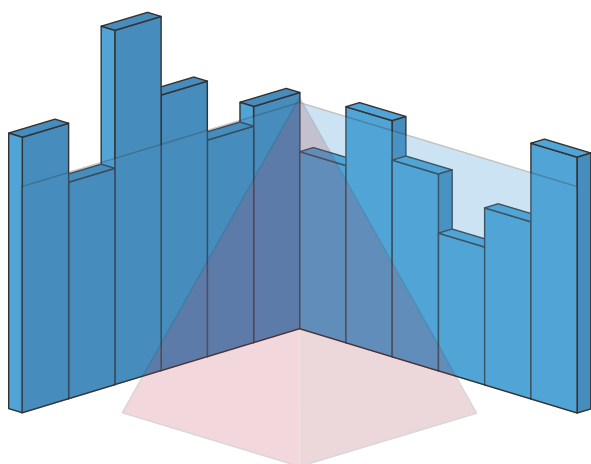
6° de 35 países americanos

4° de 12 países de América del Sur





COLOMBIA



5,83

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

40.º de 193 países

6.º de 35 países americanos

4.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA **7,00**

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Y RENDICIÓN DE CUENTAS **5,50**

COOPERACIÓN INTERNACIONAL **9,00**

POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES **7,00**

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN **5,50**

CUERPOS DE SEGURIDAD **6,00**

INTEGRIDAD TERRITORIAL **4,50**

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO **6,00**

CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA **5,00**

APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS **3,50**

PREVENCIÓN **4,50**

ACTORES NO ESTATALES **6,50**



7,66

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

2.º de 193 países

1.º de 35 países americanos

1.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES **7,20**



ACTORES CRIMINALES **8,13**



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Colombia es un importante centro de trata de personas y posee algunas de las redes de trata más sofisticadas y prolíficas del continente americano. Si bien las redes trafican principalmente con mujeres a Asia para su explotación sexual, existen otras rutas que conducen a las Islas del Caribe. Debido a la prostitución legalizada en Bogotá, Colombia tiene redes nacionales que alimentan a la capital de personas de todo el país. Colombia también tiene un sector prolífico de trata de personas en línea, principalmente para visitantes extranjeros.

Colombia es un país de tránsito vital para los migrantes que se desplazan por la región, principalmente hacia Estados Unidos. Múltiples actores criminales, desde organizaciones internacionales hasta estructuras criminales locales y redes especializadas, trafican con ciudadanos africanos, asiáticos, haitianos y cubanos a través del país. La crisis en Venezuela ha aumentado la demanda y las ganancias de los traficantes. Dicho país se ha convertido esencialmente en un centro para el tráfico de personas al que las redes colombianas tienen fácil acceso, trasladando personas hacia el norte, a Estados Unidos, o hacia el sur, a los países del Cono Sur. La COVID-19 tuvo un impacto significativo a corto plazo en el tráfico de personas, debido a las restricciones al transporte y los viajes. Sin embargo, es demasiado pronto para tener claridad sobre los impactos a más largo plazo que tendrá la pandemia de la COVID-19 en el tráfico de personas en Colombia.

TRÁFICO

El mercado de armas ilícitas de Colombia es importante como resultado de la cantidad de grupos en su territorio que compiten por armas, como ejércitos guerrilleros, paramilitares progubernamentales y varias redes criminales descentralizadas. Junto a estos grupos, Colombia tiene su propio ejército insurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se arma mediante la importación ilegal de armas con la asistencia de redes criminales internacionales. El colapso económico en Venezuela está teniendo un impacto en este mercado en Colombia, donde existe un creciente volumen de armas desviadas del Ejército venezolano destinadas a actores criminales colombianos. A pesar de que el tráfico de armas ha disminuido en cierta medida desde las décadas de 1990 y 2000, debido a la desmovilización de ciertos grupos paramilitares, el mercado sigue siendo importante y muy activo.

MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora están cada vez más extendidos en Colombia y, aunque este mercado ilícito no es tan importante para los grupos del crimen organizado más prominentes del país, algunos de los grupos criminales más sofisticados se

han estado involucrando en prácticas de extorsión dentro del mercado de la flora. Aproximadamente la mitad de la producción de madera de Colombia se considera ilegal y, desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC, se han abierto vastas áreas de bosque virgen, creando oportunidades para la explotación criminal. De igual manera, el mercado ilegal de vida silvestre es un problema urgente y Colombia se ha convertido en un importante país de origen para el tráfico de productos animales ilegales, como aves exóticas y reptiles, destinados principalmente a Europa. También existe pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en las costas del Pacífico y del departamento insular de Colombia.

Sin embargo, el delito ambiental más generalizado en el país es el comercio ilícito de recursos no renovables. Colombia es el cuarto productor de oro más importante del continente y, considerando que el 80% del oro se extrae ilegalmente, este es, con mucho, el comercio ilícito más común y lucrativo de recursos no renovables. El oro extraído ilegalmente se puede legalizar fácilmente en Colombia, lo que convierte al país en un centro para el lavado de las ganancias del narcotráfico y un destino para el oro producto del conflicto en Venezuela. La minería de oro está vinculada con la corrupción y con altos niveles de violencia y se prevé que se produzca un cambio de cultivos ilícitos a la minería de oro ilegal, debido a su rentabilidad y al debilitamiento del control ambiental como resultado de la pandemia de la COVID-19. Además, se sabe que existe contrabando de gasolina y, aunque el comercio de esmeraldas del país se ha vuelto cada vez más reglamentado, históricamente ha sido un bastión de grupos delictivos y se ha utilizado para el lavado de dinero.

DROGAS

La producción y el tráfico de cocaína son los principales mercados delictivos en Colombia y el país produce el 75% de la cocaína del mundo. Colombia vende cocaína a América del Norte, Europa y Asia a través de puntos de tránsito en África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Las sofisticadas redes criminales locales están vinculadas con grupos internacionales del crimen organizado que trafican con la droga a través de sus fronteras permeables. Los diversos esfuerzos de erradicación para reducir el número de hectáreas de cultivo de coca no han tenido éxito y la cantidad de cocaína producida sigue aumentando cada año. Brasil, históricamente una ruta de tránsito para la cocaína colombiana, ahora se ha convertido en uno de los mercados consumidores de cocaína más grandes del mundo y un importante mercado de destino para Colombia. La cocaína es una fuente importante de financiación para los grupos delictivos y una de las principales causas de conflictos y asesinatos. Además, el consumo interno de cocaína ha aumentado en Colombia.

Colombia también es un mercado de origen y destino para el cannabis, probablemente el segundo mercado de tráfico de drogas más grande después de la cocaína, y es la droga más consumida a nivel nacional. La mayor zona de cultivo de

cannabis es también uno de los actuales focos de violencia en el país, debido a que miembros de las ex-FARC se enfrentan a otros grupos por el control del sector. El comercio de heroína también es una fuente importante de ingresos para las organizaciones nacionales de tráfico. Está a cargo de grupos que a menudo operan desde Cali y proveen al mercado de alto nivel de Estados Unidos. También existe un importante mercado de heroína en el país, con cultivos de amapola en los departamentos de Nariño y del Cauca, administrado por grupos criminales y que continúa siendo una importante fuente de ingresos para las comunidades locales. Por último, parece haber un mercado de producción de drogas sintéticas a pequeña escala en Colombia y un consumo creciente vinculado a los clubes nocturnos.

ACTORES CRIMINALES

Existen numerosos grupos sofisticados y poderosos de tipo mafioso en Colombia, incluyendo la mafia de las ex-FARC y el ELN. Los principales puntos de cultivo y salida de drogas ilegales de Colombia y muchas de las áreas mineras informales están en gran parte bajo el control de estos poderosos grupos criminales organizados. Comprenden a miles de personas y están involucrados no solo en el crimen organizado transnacional, sino también en actividades de bajo nivel, como la extorsión. Ejercen el control social y la gobernanza de ciertos ámbitos, imponiendo normas, regulando la actividad civil y prestando servicios sociales en lugar del Estado.

Las redes del crimen organizado de Colombia están bien estructuradas, aunque es probable que haya habido cierta fragmentación en las últimas décadas. Han demostrado ser muy adaptables a la hora de diversificar sus métodos para responder a las condiciones cambiantes de la delincuencia

transnacional y de trabajar en redes más pequeñas e informales. Estos grupos parecen tener mayores niveles de influencia e impacto en la Colombia actual. A medida que el comercio de cocaína se ha ido fragmentando, más redes criminales han ingresado en el sector para hacerse cargo de partes del comercio. Sin embargo, también operan en la mayoría de las demás economías ilícitas, incluyendo el tráfico de armas, los delitos ambientales y la trata y el tráfico ilícito de personas.

Si bien la corrupción en Colombia es de menor nivel y menos sistémica que la observada en sus vecinos latinoamericanos, sigue siendo endémica y está presente en todos los poderes estatales y niveles de Gobierno. Por ejemplo, los políticos a menudo forman alianzas con actores criminales, en un intento por ganar elecciones y luego devuelven favores, malversando fondos estatales a dichos actores. Grupos criminales sobornan regularmente a jueces y abogados, incluyendo a los que se desempeñan en los más altos tribunales del país. La policía, los militares y los funcionarios penitenciarios también se ven envueltos frecuentemente en escándalos de corrupción.

No existe evidencia de que grupos extranjeros armados y organizados tengan presencia en Colombia. Sin embargo, existe una plétora de emisarios extranjeros de grupos narcotraficantes involucrados en el procesamiento y el transporte de drogas. También ha habido un aumento de miembros de grupos mafiosos europeos que colaboran con actores colombianos en el tráfico de cocaína, así como un aumento notable de actores mexicanos. Sin embargo, la evidencia apunta a que los cárteles mexicanos en Colombia son más bien emisarios y no estarían buscando establecer un control territorial o consolidar su presencia en el país. Finalmente, las poderosas bandas carcelarias de Brasil también mantienen una presencia operativa dentro de Colombia.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Gobierno colombiano ha adoptado una postura firme contra el crimen organizado, con una línea particularmente dura contra el narcotráfico, que se centra en la erradicación forzosa de los cultivos de drogas. Aunque queda mucho por hacer, el Gobierno ha tenido éxito a nivel municipal y nacional en reducir el poder de los grupos delictivos organizados y el potencial de violencia y disrupción. Si bien está lejos de ser perfecta, Colombia es líder entre los países latinoamericanos en transparencia y rendición de cuentas. El Estado cuenta con varias herramientas para publicar información y garantizar la transparencia gubernamental, aunque no todas las ramas del Gobierno son accesibles por igual. Sin embargo, la corrupción generalizada aún socava y obstaculiza en gran medida la transparencia de los órganos estatales y, como resultado, la confianza del público en las instituciones se ve afectada.

Si bien Colombia ha ratificado muchos de los tratados internacionales pertinentes, cabe destacar que no ha ratificado los protocolos sobre el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas de fuego y no es miembro del Tratado sobre el Comercio de Armas. Colombia tiene una relación de cooperación con Estados Unidos y ha utilizado miles de millones de dólares de dinero estadounidense para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Además, continúa extraditando a prominentes figuras criminales a Estados Unidos. Colombia también coopera con la UE, así como con otros países latinoamericanos, en iniciativas relacionadas con el crimen.

Colombia cuenta con un marco legislativo razonablemente sólido para identificar y combatir el crimen organizado y con una legislación primaria en materia de drogas y armas de fuego. En el 2019, Colombia adoptó una estrategia nacional para combatir el tráfico de personas, con la asistencia técnica de la

ONUDD. También existen leyes sobre la trata y la explotación de personas, aunque la definición de trata no se ajusta a las normas jurídicas internacionales.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Aunque existen varios mecanismos independientes para regular el sistema judicial, este se ve agobiado por la falta de recursos y los altos niveles de corrupción, con tasas de impunidad excesivamente altas. En términos generales, el organismo colombiano encargado del sistema penitenciario está bien organizado, en comparación con el de sus países vecinos y, aunque los grupos delictivos organizados, especialmente las figuras prominentes de la mafia de Medellín, continúan gestionando sus redes desde la prisión, el Estado mantiene el control sobre el sistema penitenciario.

Colombia está bien equipada para combatir el crimen organizado: tiene el segundo cuerpo de fuerzas armadas más grande de América, así como numerosos cuerpos de inteligencia y unidades especiales enfocadas en el crimen organizado. Sin embargo, la inmensidad y la dificultad de la geografía del país han facilitado que los grupos criminales hayan consolidado su control en áreas de difícil alcance para los cuerpos de seguridad. Además, la comunicación entre las agencias de inteligencia y los órganos judiciales a veces es deficiente y la corrupción generalizada sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de la ley. La reforma policial se ha convertido en un tema político importante en el país, en respuesta a los homicidios de civiles por parte de la Policía.

Las permeables fronteras internacionales de Colombia, con grandes áreas ocupadas por selva tropical, crean una debilidad estratégica para el Gobierno, lo que permite a los grupos criminales mover de manera encubierta grandes volúmenes de productos ilegales dentro y fuera del país. La geografía del país también ha dificultado el establecimiento de la presencia efectiva de cuerpos policiales en áreas remotas, donde los grupos criminales han logrado ejercer un control social, económico y político.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Colombia tiene uno de los niveles más altos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en el mundo. Si bien el país ha tenido cierto éxito en la investigación y el enjuiciamiento de las actividades de lavado de dinero, el problema es tan extendido que abruma los esfuerzos del Estado. Colombia cuenta con una unidad especializada en la lucha contra el lavado de dinero, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que opera de manera conjunta con los cuerpos de seguridad y las agencias de inteligencia para detectar movimientos financieros sospechosos. Sin embargo, las prácticas de lavado de dinero son sofisticadas y diversas, lo que dificulta su detección.

Colombia tiene un marco de regulación de la economía relativamente bueno, gracias a sus entidades estatales y al banco nacional, aunque ha habido informes de que corporaciones nacionales y extranjeras se han visto obligadas

a pagar a grupos paramilitares a cambio de seguridad contra amenazas insurgentes. El principal punto débil radica en la dificultad para acceder al sistema financiero, especialmente en las áreas rurales, creando las condiciones ideales para que los grupos criminales intervengan para brindar servicios financieros y lavar dinero sucio de manera eficaz. Las prácticas de extorsión y los pagos por protección abundan en estas áreas y los derechos de propiedad de la tierra siguen siendo un problema importante que afecta negativamente a las poblaciones vulnerables.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Si bien Colombia cuenta con leyes destinadas a apoyar a las víctimas de los conflictos armados, los procesos de reparación de víctimas gestionados por el Estado a menudo se implementan de manera deficiente, lo que conlleva demoras y carencias. La falta de programas de protección de testigos también representa un problema grave, debido a que Colombia se sitúa muy por debajo de los estándares internacionales para ayudar a las víctimas a salir de la esclavitud. La asistencia a las víctimas de la trata de personas y a las víctimas del uso indebido de drogas son otros ámbitos en los que falta mucho apoyo.

El Gobierno colombiano ha adoptado un enfoque fundamentalmente militarizado para combatir el crimen organizado y faltan medidas de prevención efectivas. Los programas destinados a obstaculizar los cultivos para la elaboración de drogas están perdiendo impulso y las leyes laxas sobre la confiscación de dosis personales de drogas ilegales parecen débiles y han sido percibidas con escepticismo. Sin embargo, ha habido intentos de implementar estrategias de prevención más experimentales, no policiales, destinadas a frenar la gobernanza criminal, con políticas como la vigilancia de puntos críticos en Bogotá y Cali. Aunque estos no han llevado a cambios sustanciales en las políticas, indican una inclinación por soluciones políticas novedosas y un liderazgo progresivo de los alcaldes y los grupos de la sociedad civil.

Existe una presencia de la sociedad civil bastante sólida en Colombia, que juega un papel clave en el análisis y la represión del crimen organizado, mediando con los grupos criminales y ayudando a sacar a los jóvenes vulnerables de las bandas. Las ONG, así como grupos internacionales y religiosos y organizaciones vinculadas al sector privado, juegan un papel importante en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la escala del crimen organizado y la violencia asociada que sufren los actores de la sociedad civil obstaculizan la eficacia de sus iniciativas. Si bien el periodismo de investigación juega un papel importante en Colombia, es también uno de los países más peligrosos para los periodistas que cubren temas como el medioambiente, los conflictos armados, el crimen organizado y la corrupción, que son frecuentemente blanco de secuestros y asesinatos.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.